



JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS)

Manizales, once (11) de mayo de dos mil veinte (2020)

Sentencia de tutela de primera instancia no. 43

Radicado: 17001-31-84-004-2020-00043-00

1. ASUNTO

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida por el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA contra la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS –D.T.S.C.- y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –C.N.S.C.-, acción a la que fue vinculada el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ.

2. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

Manifestó el accionante que se presentó al concurso de méritos contenido en la convocatoria no. 698 de 2018, para el empleo público con código OPEC no.63907, denominado profesional universitario de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con única vacante para optar.

Indicó que obtuvo un puntaje total de 71.39 constituyendo lista de elegible, fechada 14 de febrero del 2020 y publicado el 27 ídem, siendo él el único conformante, sin que la DTSC solicitara la exclusión de la lista de elegibles, aceptando que la valoración de requisitos mínimos y el análisis de antecedentes realizado por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL estuvo adecuado.

Argumentó que dentro de la lista de elegibles se encuentra en segundo lugar el señor FREDDY DAVID QUIROGA PÁEZ, quien actualmente desempeña en encargo el empleo que él ganó y al cual se le impide su nombramiento y posesión.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

Alegó que en firme y publicada la lista de elegibles, el 28 de febrero el señor FREDDY DAVID QUIROGA PÁEZ, segundo en la lista de elegibles y quien actualmente ocupa el cargo objeto de la acción de tutela, aparentemente lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación allegando escrito de manera anónima a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, aduciendo ausencia de tiempos de cotización pensional en su historia laboral y que es representante legal de una corporación en la que laboró.

Adujo que la denuncia aparentemente fue interpuesta en la ciudad de Ibagué pero aparece con recibido de la ciudad de Manizales, domicilio y municipio de trabajo de señor QUIROGA.

Indicó que la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en respuesta a dos (2) derechos de petición que presentó, le manifestó que debió realizarse su nombramiento y posesión en el empleo objeto de debate acorde con el Decreto 1083.

Manifestó que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, el 5 de marzo de 2020, le solicitó la documentación de experiencia laboral y formación académica, la cual el procedió a aportar.

Alegó que si bien el numeral 18 del artículo 35 de la ley 734 de 2002 manifiesta que no se puede nombrar o elegir a personas que no reúnan requisitos constitucionales, legales o reglamentarios o darles posesión a sabiendas de ello, no existe orden de autoridad judicial ni disciplinaria y menos ningún fallo que le dé la razón al escrito anónimo, razón por la que ostenta presunción de inocencia, buena fe y legalidad de los documentos aportados.

El 12 de marzo de 2020, la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, expidió la Resolución no. 170 de 2020, mediante la cual suspendió su proceso de nombramiento y posesión, incumpliendo lo Dispuesto en el Decreto 1083, con el argumento de una denuncia anónima.

Radicados: 17001-31-.84-004-2020-0043-00
Demandante: JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA
Demandadas: CNSC Y DTSC
Asunto: Sentencia de tutela de primera instancia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

Posteriormente, continuó, el 24 de marzo de 2020 la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS expidió la Resolución no. 218 de 2020, por medio de la cual suspendió todos los términos, trámites, nombramientos, actos de posesión y demás procedimientos del concurso de méritos, pues la Gobernación del Departamento de Caldas suspendió términos y la necesidad de mantener los provisionales y encargados en los empleos por la contingencia del COVID-19, pues se requiere personas con experiencia por el hecho gravoso.

Indicó que repuso la decisión el 18 de marzo por medio de correo electrónico, sin que a la fecha haya obtenido ningún tipo de respuesta. Adujo que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, expidió el Decreto 491 de 2020, mediante el cual fijó reglas específicamente en el artículo 14 parágrafo tercero, en el que establece que no se pueden omitir los nombramientos y posesiones cuando existan listas de elegibles en firme.

Manifestó que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS presentó acción de tutela solicitando no dar aplicación al artículo 14 del Decreto 491 de 2020, la cual fue declarada improcedente, debiendo la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS expedir la Resolución no. 251 de 2020, la cual dejó sin efectos la Resolución no. 218 y retomó desde el 24 de abril los términos de nombramiento y posesión del concurso de méritos no. 698 de 2018. Alegó que no es posible interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido al estado de emergencia económica, social y ecológica establecida en el Decreto 491 de 2020.

Por lo anterior, solicitó se tutelaran sus derechos fundamentales y se ordene a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, realice las actuaciones tendientes a su nombramiento y posesión en período de prueba en el cargo de profesional universitario para la Subdirección Jurídica, conforme a la lista de elegibles.

Radicados: 17001-31-84-004-2020-0043-00
Demandante: JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA
Demandadas: CNSC Y DTSC
Asunto: Sentencia de tutela de primera instancia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

3. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO

3.1 LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL indicó que la presente acción de tutela deviene improcedente contra dicha entidad, porque la competencia constitucional y legal llega solo a la expedición y firmeza de las respectivas listas de elegibles.

Manifestó que consultado el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad, se logró constatar que el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA concursó para el empleo de nivel profesional denominado profesional universitario de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, quien superó las etapas del concurso de méritos y ocupó la primera posición con 71.39 puntos en la lista de elegibles, conformada mediante Resolución del 14 de febrero del 2020.

Adujo que teniendo en cuenta la emergencia social ocasionada por la pandemia generada por el COVID-19, los concursos de méritos que se encuentran en curso y las listas de elegibles que se expidieron en desarrollo de los mismos, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, dispuso en su artículo 14 el aplazamiento de los procesos de selección en curso.

Alegó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues adelantó el concurso de méritos con base en la constitución, la ley y el Acuerdo de convocatoria. Reiteró que no tiene competencia para realizar nombramientos y posesiones en las diferentes entidades que hacen parte del concurso de méritos y, por lo tanto, solicitó su desvinculación.

3.2 Por su parte, la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS indicó que la jurisprudencia ha establecido que la acción de tutela no es procedente para controvertir actos administrativos, toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación deben ser dirimidas a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Manifestó que no han actuado de mala fe en la gestión administrativa y jurídica que rodea el proceso de nombramiento y posesión en los cargos públicos provistos en virtud del concurso de méritos.

Radicados: 17001-31-84-004-2020-0043-00
Demandante: JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA
Demandadas: CNSC Y DTSC
Asunto: Sentencia de tutela de primera instancia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

Adujo que no existe un desconocimiento de los derechos adquiridos por el accionante, pues desde el inicio de la convocatoria y el concurso de méritos adelantado por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, la entidad ha estado presta a cumplir, acatar y apoyar la ejecución del mismo.

Expresó que dicho nombramiento se encuentra actualmente suspendido por situaciones de interés colectivo y público, que afectan la transparencia e igualdad del proceso. Adujo que éste no es el único nombramiento que se encuentra suspendido, como se puede verificar en la Resolución no. 169 del 12 de marzo del 2020.

Agregó que ante el conocimiento de la denuncia, la entidad y sus funcionarios en cumplimiento de sus deberes legales y ante la duda razonable, decidieron suspender temporalmente el proceso de nombramiento y posesión, término durante el cual la entidad se encuentra realizando verificación de los requisitos.

Finalmente, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

3.3 Hasta el momento de emisión de la presente sentencia, el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ no ha dado respuesta a la demanda, pese haber sido notificado en debida forma.

4. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

Según los artículos 86 superior y 37 del Decreto 2591 de 1991, este despacho es competente para resolver el asunto de la referencia.

4.2 Problema jurídico

Corresponde determinar si la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS –DTSC-, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y/o el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ, vulneran los derechos fundamentales al debido



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

proceso, igualdad y al trabajo (acceso a cargos públicos) del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA, al no realizar su nombramiento en el cargo de profesional universitario código 63907 grado 2, conforme la lista de elegibles que existe por cuenta de la convocatoria no.698 del año 2018, haciendo procedente el amparo o si, por el contrario, la tutela resulta improcedente.

4.3 Principio de subsidiariedad de la acción de tutela

El carácter subsidiario de la acción de tutela se refiere al hecho de que solo se puede acudir a este mecanismo en ausencia de otros medios ordinarios de defensa o, cuando existiendo estos, se tramite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. Lo anterior, porque la acción de tutela no es un mecanismo judicial adicional o paralelo a los establecidos de manera previa por el Legislador.

A partir de este planeamiento inicial, ha insistido la Corte Constitucional que la subsidiariedad es requisito fundamental de procedibilidad de la acción de tutela.

Por tal motivo, cuando las personas adviertan vulnerados sus derechos fundamentales, deberán acudir inicialmente a los medios ordinarios de defensa, en tanto estos mecanismos sean oportunos y eficaces.

Así lo ha señalado el Guarda de la Carta:

"...El inciso 4º del artículo 86 Superior consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y establece que "[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

Del mismo modo, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

En la sentencia T-1008 de 2012, esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni vaciar de competencia a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de obtener un



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines.

Posteriormente, en las **sentencias T-373 de 2015 y T-630 de 2015**, estableció que si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se **consideran amenazados o vulnerados, el afectado debe agotarlos de forma principal y no utilizar directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la administración de justicia...**¹

4.4 Acceso a cargos públicos mediante concurso

El concurso público se ha establecido como una herramienta de garantía por excelencia para que el mérito de los aspirantes que pretenden acceder a un cargo de la función pública predomine ante cualquier otra determinación.

Al respecto, la Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU 011 de 2018:

"...El artículo 40, numeral 7º, de la Constitución señala que "todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los cuales ha de aplicarse". Entonces, de la existencia de este derecho (acceder al desempeño de funciones y cargos públicos) no puede derivarse que el ejercicio de funciones públicas está libre de toda exigencia y requisito para quien es llamado a ocupar los cargos de mayor responsabilidad². Por el contrario, el buen éxito en la administración pública y la satisfacción del bien común dependen de una adecuada preparación y de la idoneidad profesional, moral y técnica de las personas en las que se confía el compromiso de alcanzar las metas trazadas por la Constitución. Ello se expresa no solo en el señalamiento previo y general de la forma como se accederá al desempeño del cargo, sino también en la previsión de las calidades y requisitos que debe reunir la persona en quien recaiga la designación³.

21. En línea con lo anterior, el artículo 125 de la Constitución establece que "los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera" y que tanto el ingreso como el ascenso a los mismos "(...) se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes". En este sentido, la carrera administrativa basada en el concurso de méritos es el mecanismo general y preferente de acceso al servicio público, por medio del cual se garantiza la selección de servidores públicos cuyas capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación permitan atender las finalidades del Estado Social de Derecho.

¹ Cfr., entre otras, Corte Constitucional sentencia T-673 de 2017.

² Sentencia C-483 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

³ Sentencia C-678 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

22. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que la carrera y el concurso de méritos son un **sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad**, en cuanto garantiza que los concursantes participen en igualdad de condiciones y los cargos públicos sean ocupados por los mejor calificados⁴. Además, permite eliminar la discrecionalidad del nominador y evitar que imperen criterios arbitrarios y subjetivos en la selección de los aspirantes. En esa medida, dicho procedimiento asegura que la administración pública esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, lo cual contribuye a la satisfacción del interés general y el bien común.

23. De igual manera, el ingreso a los cargos públicos a través del concurso de méritos, busca el pleno desarrollo de los principios que orientan la función administrativa, así como la igualdad, eficacia, y eficiencia en el desarrollo de las funciones públicas. A su vez, garantiza los derechos de los trabajadores, entre ellos, el de igualdad de oportunidades y estabilidad en el empleo⁵...”

En relación con las reglas que rigen el proceso de selección, la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” dispone en el artículo 31 que la Convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la CNSC como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes. Es decir, la convocatoria contiene las reglas sobre las cuales se desarrollan todas las etapas del concurso, reglas que son de obligatorio cumplimiento tanto para la administración pública como para los participantes, en aras de garantizar la igualdad de todos los concursantes.

4.5 Derecho fundamental al debido proceso administrativo

Todas las actuaciones judiciales y administrativas se encuentran regladas por normas y pautas que el legislador o la Constitución han instituido para garantizar la efectividad de tales diligencias, en procura de respetar los postulados del Estado Social de Derecho.

Esta garantía constitucional está consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política y comprende una serie de sub-principios aplicables a las actuaciones judiciales y administrativas, tales como el de legalidad, favorabilidad penal, presunción de inocencia, juez natural, observancia de las formas propias del juicio,

⁴ Sentencia SU-446 de 2011. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁵ Sentencia C-288 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

derecho de contradicción y defensa, celeridad, derecho a presentar pruebas, impugnación, publicidad y non bis in ídem, entre otros.

La defensa de las personas que se ven interesadas o afectadas por una intervención administrativa siempre debe ser garantizada. Por tal razón, la ley dispone, según sea el caso, de una serie de herramientas, recursos o instrumentos legales para asegurar que todos los ciudadanos que se hallan inmersos en una actuación de la administración puedan defenderse de forma oportuna y real.

Como regla general, los asociados deben conocer el estado de la actuación para poder ejercer el derecho a la defensa, solicitar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra y recurrir las decisiones que le sean desfavorables, siendo tarea de la función pública hacer que estos derechos sean garantizados en cada actuación que adelante frente a los particulares, con miras a adecuar los trámites a las preceptivas del debido proceso y los principios que rigen la función administrativa: primacía del interés general, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, economía y publicidad (art. 209 Constitución Política).

El principio de publicidad se cumple con la comunicación de los actos y actuaciones administrativas. Estos actos de comunicación se encuentran establecidos en la ley y pueden ser reales o fictos como ocurre por ejemplo en la notificación personal (para los primeros) y en la notificación por edicto (para los segundos).

Lo que acabamos de expresar ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, autoridad que en Sentencia T-084 de 2015 dijo:

“...a. El debido proceso requiere una participación real y efectiva del administrado en los asuntos que le afectan.

b. Las actuaciones administrativas deben garantizar al administrado la oportunidad de expresar sus opiniones y solicitar pruebas, “con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas”.⁶

c. El debido proceso administrativo comprende el derecho a conocer del trámite que afecta al ciudadano, a aportar, impugnar y contradecir las pruebas, impugnar las decisiones que considere contrarias a sus derechos, que el trámite lo adelante un funcionario competente y que se cumplan las normas propias del juicio, al igual que

⁶ Corte Constitucional, sentencia T-377 de 1997, MP. Hernando Herrera Vergara.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de defensa, de contradicción, la celeridad y el respeto a la cosa juzgada... (Subrayado y negrillas fuera de texto).

4.6 Caso concreto

El señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA acudió a la acción de tutela en busca de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, derecho al trabajo y al acceso a los cargos públicos, solicitando ordenar a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS que proceda realizar su nombramiento y posesión en periodo de prueba, conforme la lista de elegibles al cargo de profesional universitario, código 63907, grado 2.

La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL solicitó ser desvinculada del presente trámite, pues su labor llega hasta la conformación de la lista de elegibles, alegando que no tiene competencia para realizar nombramientos y posesiones en las diferentes entidades que hacen parte del concurso de méritos.

Por su parte, la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS indicó que el proceso de nombramiento y posesión del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA se encuentra suspendido, debido al Decreto expedido por el Gobierno Nacional por la pandemia ocasionada por el COVID- 19, igualmente que al tener conocimiento de una denuncia penal en su contra, se encuentran verificando la veracidad de los documentos aportados por el accionante como es su deber legal.

Dentro de este trámite se acreditó que efectivamente la lista de elegibles se encuentra debidamente conformada y que el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA ocupa la primera posición para ocupar el cargo de profesional universitario grado 2 en la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Ahora bien, la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS expidió la Resolución no. 218 del 24 de marzo del 2020, por medio de la cual suspendió los términos y procedimientos inmersos dentro del concurso de méritos no. 698 de 2018, argumentando que la Gobernación del Departamento de Caldas informó que suspende los términos para la posesión de quienes se encuentren en lista de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

elegibles, motivo por el cual y teniendo en cuenta que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS es un establecimiento público de orden departamental, de cara a la crisis sanitaria que enfrenta el país, se hace necesario tomar decisiones que viabilicen la protección de los derechos de la comunidad.

Acto seguido, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, adoptó medidas para diversos aspectos de las entidades públicas, dentro de las cuales se hace alusión en su artículo 14 a los procesos de selección en curso, argumentado que cuando ya exista lista de elegibles, se efectuarán los nombramientos y posesiones.

Frente a este panorama normativo, si bien es claro para este Despacho la existencia de la Resolución emitida por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS relacionada con la suspensión de términos en el concurso de méritos, no puede desconocerse el contenido de un Decreto normativo de carácter nacional, en el cual se fijan unos lineamientos expresos frente a los concursos de méritos en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y que, por la jerarquía de la autoridad que lo expide, tiene prelación respecto de su aplicación, frente al expedido por la autoridad del orden departamental.

Por esta razón, es posible afirmar que en el presente caso, al existir lista de elegibles en firme, es procedente que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS continúe con el proceso de nombramiento y posesión.

No puede olvidarse que el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA tiene un derecho adquirido al haber superado las etapas del concurso, igualmente se encuentra de primero en la lista para ocupar el cargo pretendido, por ende, debe ser nombrado y posesionado sin mayores dilaciones. Bajo tales argumentos, tener que acudir en el presente caso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no resulta idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.

Respecto a este tema la Corte Constitucional en sentencia T-610 de 2017 indicó que:

Radicados: 17001-31-84-004-2020-0043-00
Demandante: JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA
Demandadas: CNSC Y DTSC
Asunto: Sentencia de tutela de primera instancia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

"...la jurisprudencia constitucional ha estimado que la vía judicial de lo contencioso administrativo no es siempre idónea y eficaz para reponer la vulneración alegada pues, en ese caso, las medidas cautelares contempladas pueden no conceder una protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las personas que, habiendo adelantado los trámites necesarios para su vinculación con la administración a través de un sistema de selección de méritos, ven truncada su posibilidad de acceder al cargo por aspectos relacionados y que afectan bienes constitucionales. En esa medida, los ciudadanos se ven expuestos, por ejemplo, al riesgo de que el registro o la lista de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia y, por consiguiente, cualquier orden futura relacionada con una eventual compensación económica, la reelaboración de la lista y el nombramiento tardío de quien tiene el derecho a posesionarse en el empleo público, en realidad no sea suficiente ni oportuna para resarcir el quebrantamiento ocasionado por la presunta ilegalidad en la actuación de la administración ni para satisfacer, en consecuencia, la pretensión de amparo consistente en el nombramiento en el cargo ofertado. ..."

Así las cosas, se ordenará a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a continuar con el trámite respectivo para el nombramiento y posesión del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA conforme la lista de elegibles que ya se encuentra en firme.

Al no encontrarse ninguna responsabilidad respecto de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ, se ordenará su desvinculación.

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: **TUTELAR** el derecho fundamental del acceso a cargos públicos invocado por el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA dentro de la acción constitucional promovida contra la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS –DTSC-, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-, acción a la que fue vinculada el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO DE MANIZALES

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS –DTSC-, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a continuar con el correspondiente trámite para el nombramiento y posesión del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA, conforme la lista de elegibles que se encuentra en firme.

TERCERO: ORDENAR la **DESVINCULACIÓN** del presente trámite de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y el señor FREDDY DAVID QUIROGA PAEZ.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e **INFORMARLES** que la misma puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: Si esta decisión no es oportunamente impugnada, **REMÍTASE** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MÓNICA MARÍA BOTERO LÓPEZ

Juez